



Por una verdadera revolución educativa en Colombia

Álvaro Mendoza Ramírez

Doctor en Derecho Privado de la Universidad de París. Rector de la Universidad de La Sabana, Colombia.

El gobierno actual, decidido, como parece estarlo, a propiciar cambios radicales en nuestro país, en procura de unas mejores condiciones para la convivencia social, ha venido predicando, como parte de su programa de cien puntos, anunciado desde la misma campaña presidencial, una serie de ajustes en el sector educativo, que viene denominando pomposamente como "revolución educativa".

Sin entrar a pronunciarme, porque no me corresponde y, además, porque la inmediatez de las propuestas no facilita su estudio desapasionado, sobre la bondad de estas presentaciones, que implican, más que otra cosa, una serie de ajustes al sector, entre los cuales deben destacarse los propósitos de obtener una mejor calidad en los diferentes niveles de la educación y de lograr un significativo aumento en la cobertura, quisiera que pudieran reservarse las palabras "revolución educativa" para un verdadero programa que cambie de manera radical las concepciones que hasta ahora han guiado la inversión pública en el sector. En la medida en que el término "revolución" se toma prestado de la historia de las instituciones políticas, debe entenderse por tal una acción que subvierta lo existente, para pasar a algo nuevo, a algo que resulte notoriamente distinto de cuanto existía previamente, sea en el orden cualitativo, sea en aquel cuantitativo.

A riesgo de que se considere que mis planteamientos resultan poco originales, por ser en su esencia los mismos de la época borbónica de la Ilustración, durante la cual se consideró que el papel primordial del Estado residía en el fomento de la enseñanza, como en ese entonces se la denominaba, y que esta, por sí sola, constituía la panacea para el remedio de todos los males sociales, cabe afirmar que una verdadera "revolución educativa" requiere de un cambio radical de la actitud del país hacia el sector, en forma tal que este pase a convertirse en el gran motor del desarrollo económico y social. No se trata de afirmar que el único remedio que requieren los males de nuestra patria es el fomento de la educación, tanto en su cobertura

como en su calidad, pero sí de que es esta una de las mejores medidas, acaso la mejor, entre aquellas que se pueden tomar para lograr un importante salto de calidad en la vida nacional.

Pasaba revista, algunos años ha, a un estudio publicado por la Unesco, hoy infortunadamente desaparecido de mi biblioteca, por esa devastadora acción que suelen ejercer los buenos amigos a quienes se ponderan los libros propios, estudio en el cual se superponen las curvas de crecimiento económico en un número amplio de países escogidos como muestra, con las correspondientes a la inversión en el sector educativo, medida esta como un porcentaje del PIB. La conclusión resultaba asombrosamente reveladora: existía una total correlación entre las tendencias de crecimiento económico y las de incremento de recursos para el sector educativo, a punto tal que podían sobreponerse (de hecho el estudio lo hacía), para destacar su coincidencia, con tan solo unas pocas excepciones explicables por sí mismas, como el caso de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. En estos el crecimiento económico, por razones ampliamente conocidas, derivaba más del subsuelo que de la capacitación de sus habitantes, más de los asentamientos fósiles de muchos milenios antes, que del conocimiento presente de su población.

Un dato paralelo deriva del estudio de las políticas educativas, varias décadas atrás, en los llamados "tigres asiáticos", países cuyo asombroso crecimiento económico ha venido siendo asociado al desarrollo de sus exportaciones, afirmación esta que no es discutible, solo que no explica por sí sola el fenómeno. En efecto, cabe preguntarnos cómo pudo obtenerse este incremento en la actividad exportadora y cómo se alcanzó la calidad en la producción de elementos exportables de alta tecnología, en países con un retardo considerable en su desarrollo industrial, tal que los colocaba, pocas décadas antes, por debajo de la mayoría de los países latinoamericanos. Sorprende, en efecto, un resultado como el obtenido en una serie de naciones, que supieron pasar, en muy pocos años, del subdesarrollo acentuado a ser consideradas como países de elevada producción tecnológica y con niveles de bienestar que superan aquellos de estados que habían, desde mucho tiempo antes, vencido la barrera del subdesarrollo.

El secreto se encuentra, profundizando en las verdaderas causas del cambio, una vez más, en el esfuerzo previo realizado por estos países en materia educativa, habiendo logrado en poco más de dos generaciones, contadas estas por períodos de treinta años, un cambio cualitativo inmenso: de una población casi totalmente analfabeta, a unos habitantes en su inmensa mayoría con educación media completa y con una cobertura superior al treinta por ciento del total en los niveles de educación superior.

Un ejemplo adicional podemos encontrarlo actualmente en pleno desarrollo en la República Popular China, en donde se vienen logrando, desde hace varios años, las más altas tasas de crecimiento económico en todo el mundo, año por año, con apoyo en una importantísima inversión, destinada a preparar a una parte importante de su población, aquella de la costa este, constituida por más de ochenta millones de chinos. Para esta decisión política, el país es consciente de que carece de recursos para atender de manera suficiente a la educación de más de mil cien millones

de personas adicionales. Sin embargo, el Estado actúa con la confianza de que el esfuerzo que está realizando, de manera concentrada en una parte importante de su población, permitirá que luego esta se constituya en punto de apoyo para extender los beneficios obtenidos al resto del país.

Enfocado el tema desde un ángulo diferente, los españoles realizaron recientemente un estudio para el Banco Mundial, cuyas cifras demuestran que la inversión de recursos en las actividades educativas no solamente jalona el desarrollo general del país, sino que es retributiva para el Estado pocas décadas adelante. En efecto, la diferencia entre la contribución fiscal de una persona que haya alcanzado la educación superior, comparada con quien no haya llegado a ella, permite recuperar el costo completo de lo invertido, si el Estado cubrió la totalidad de esta inversión, en menos de la tercera parte del tiempo en que el contribuyente respectivo aporta su diferencia incremental a las arcas públicas. Este estudio está actualmente soportando la titularización de préstamos educativos, con la expectativa de flujos de caja de retorno que permiten una llamativa rentabilidad para los inversionistas en esta clase de papeles.

Un estudio similar fue publicado por el ex ministro Luis Carlos Valenzuela en la edición de la revista *Semana* del 16 de septiembre del año pasado; allí señalaba, con cifras contundentes, el altísimo retorno de una inversión en capacitación a nivel de pregrado universitario.

Las penurias en el ingreso nacional suelen llevar a un reparto de las pocas posibilidades de este en una serie de frentes, todos ellos sin duda importantes, pero obteniendo una dispersión de las posibilidades entre múltiples requerimientos públicos, cada uno, en últimas, insuficientemente atendido, con lo cual ninguno termina convirtiéndose en un determinante propósito nacional que jalone a todos los demás. Conocido es el proverbio, aplicable igualmente a las altas determinaciones de una política de hacienda pública, de que "mucho pobre daña la limosna". Nuestros países, de otra parte, se ahogan, con no poca frecuencia, en la improvisación de las decisiones estatales en materia de inversión, generalmente ligadas a problemas coyunturales y sin pretensiones que vayan más allá del período de los funcionarios que las adoptan. Un planeamiento consistente y de largo alcance ha brillado por su ausencia en naciones como la nuestra, particularmente en el campo educativo, cuyos resultados solamente pueden verse varias décadas después, es decir, cuando no son políticamente relevantes para sus autores.

Añádase a lo anterior la circunstancia de que las áreas más ligadas al desarrollo nacional, como es el caso de la educación, de la alimentación, de la vivienda y de la salud, suelen ser confiadas, a través de los diferentes gobiernos, a representantes políticos sin la suficiente incidencia en las decisiones del gobierno central, una vez agotada la partija de aquellas posiciones burocráticas fuertemente apetecidas por corresponder a temas coyunturales de gran impacto inmediato, como ocurre entre nosotros con los ministerios del Interior, de la Defensa, de las Relaciones Exteriores, etc. Frente a estos, temas como los de la educación y la salud suelen quedar rezagados y ser provistos como cuotas políticas de última hora, si bien no ha sido esta ciertamente la conducta del actual gobierno. Un rápido vistazo a la historia nacional reciente permite detectar

una notoria inestabilidad en quienes han ocupado la cartera de Educación Nacional, circunstancia que les impide desarrollar un programa de algún aliento, debiendo limitarse a la atención de cuestiones meramente coyunturales y sin una verdadera incidencia en el futuro del país.

Una verdadera revolución educativa requiere de un gran propósito nacional; de una participación de este propósito en la ley del plan, en forma tal que se asegure su pervivencia a través de los distintos gobiernos; de una voluntad política decidida, que perdure por varias décadas; de una clara conciencia de cuanto puede obtenerse a través de una política de esta estirpe; de una dedicación muy grande de recursos, privilegiando al sector educativo por sobre otros con menor capacidad transformadora.

A todo lo anterior puede añadirse una consideración más, referida a una de las lacras más preocupantes de nuestra nacionalidad. Colombia es y ha sido en todo el curso de su historia un país particularmente violento, que ha desperdiciado buena parte de sus energías nacionales, no ahora, sino siempre, a través de luchas fratricidas y de reacciones poco civilizadas. Tenemos el triste privilegio de ostentar de lejos el más alto índice de violencia per cápita en todo el mundo, incluyendo aquellos países que suelen calificarse como en situación de guerra interna o externa, y conservaríamos esta triste posición aun suprimiendo a la subversión organizada, en tanto esta aporta poco menos del veinte por ciento de los casos de sangre del país.

Muchas y muy variadas pueden ser las soluciones que se propongan para este problema. Sin embargo, una de estas, ciertamente no la menos importante, es con seguridad el aumento del nivel educativo en la población. Si bien no siempre, la experiencia permite afirmar que, en la medida en que sube la cultura de un país, disminuyen sus reacciones primarias, en tanto aquellas de carácter violento suelen corresponder a un muy bajo promedio educativo. El desarrollo del conocimiento y la afición a las manifestaciones de la vida cultural producen refinamientos de espíritu, que alejan, en buena parte de los casos, de las reacciones violentas. Para sustentar una tal afirmación, basta observar la población carcelaria del país o de otras naciones, para afirmar que la inmensa mayoría de esta, aun contando con la gran variedad de las manifestaciones delictivas, corresponde a personas de muy bajo nivel educativo o carentes casi por completo de este.

Consiguientemente, puede afirmarse que si nuestra patria vuelca sus esfuerzos hacia la educación, a través de un esfuerzo sostenido, que comprenda todos los niveles de ella (primario, medio y superior), logrará el doble efecto de aumentar considerablemente el bienestar de la población y de disminuir sus índices de violencia. Una verdadera revolución educativa puede ser un salto hacia un futuro sensiblemente mejor para nosotros y para nuestros hijos. La cuestión estriba en saber si para un esfuerzo de esta índole podemos contar con una decisión nacional y con una voluntad política suficientemente persistentes, dentro de un sistema democrático altamente inestable